
Nueva regulación de los procesos de nulidad matrimonial

New Regulation of Marriage Nullity Processes

RECIBIDO: 10 DE ABRIL DE 2016 / ACEPTADO: 12 DE MAYO DE 2016

Rafael RODRÍGUEZ-OCAÑA

Facultad de Derecho Canónico. Universidad de Navarra
Pamplona. España
rrodoca@unav.es

Resumen: El 8 de diciembre de 2015 entraron en vigor dos nuevas normativas sobre los procesos de nulidad de matrimonio ordenadas por el papa Francisco a través del m.p. *Mitis iudex Dominus Iesus* y del m.p. *Mitis et misericors Iesus*, el primero para la iglesia latina y el segundo para las iglesias orientales. En estas páginas se ofrece una presentación del m.p. *Mitis iudex*, con referencia a las novedades más relevantes y a las opiniones doctrinales que se han dado sobre ellas; además daremos nuestra opinión sobre algunas cuestiones que nos parecen de interés.

Palabras clave: *Mitis iudex Dominus*, Causas de nulidad, Reforma del proceso.

Abstract: On December 8, 2015 two new norms regulating the processes of nullity of marriage came into effect. These norms had been ordered by Pope Francis through his m.p. *Mitis iudex Dominus Iesus* and his m.p. *Mitis et misericors Iesus*, the first for the Latin Church and the second for the Eastern churches. The present article offers a presentation of MI, with references to the most relevant developments and to the doctrinal opinions that have been expressed in relation to MI. In addition, the author of the article offers his opinion on particular issues which he considers of special interest.

Keywords: *Mitis iudex Dominus*, Marriage Processes, Reform Canonical Process.

La relación existente entre la teología, la pastoral y el derecho de la Iglesia es especialmente relevante cuando se trata del sacramento del matrimonio. En el matrimonio, en efecto, los aspectos dogmáticos que se refieren a su realidad sacramental y configuradora con Cristo, los pastorales que tratan de que la doctrina sea presentada y vivida del mejor modo de acuerdo con cada tiempo, y los jurídicos que lo ordenan desde el punto de vista de la justicia y de la realidad de las cosas, no son elementos separables. Lo que sucede en cada uno de ellos tiene efectos en los otros dos y, en consecuencia, se debe valorar cada «novedad» –teológica, pastoral o canónica– desde el punto de vista del conjunto de todos ellos.

Un ejemplo claro de lo anterior es el motu proprio *Mitis Iudex Dominus* del papa Francisco, que modifica la regulación de los procesos de nulidad matrimonial. El documento es de naturaleza jurídico-canónica, y más concretamente, procesal, pero ello no lo aleja de la reflexión teológica que ve en la novedad de su doctrina elementos que le afectan.

En el presente artículo se expone y reflexiona sobre la doctrina de *Mitis Iudex Dominus* siguiendo un método estrictamente jurídico-canónico. A los teólogos competirá, una vez comprendido el alcance de la reforma que comporta, realizar su propia reflexión, guiada siempre por la fe «quaerens intellectum».

1. LA COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO

El 27-VIII-2014 el Papa constituyó una Comisión Especial de estudio para la reforma del proceso matrimonial canónico. En un comunicado de la oficina de prensa vaticana, se señalaba que «los trabajos de la Comisión Especial empezarán lo antes posible y su objetivo es preparar una propuesta de reforma del proceso matrimonial para simplificar el procedimiento, agilizándola y salvaguardando el principio de indisolubilidad del matrimonio»¹.

La Comisión fue presidida por Mons. Pio Vito Pinto, Decano del Tribunal de la Rota Romana, y estuvo compuesta por 10 miembros más.

«Este grupo –dice el preámbulo del m.p. *Mitis Iudex* (MI)– ha elaborado un esquema de reforma que, sometido a meditada consideración, con el auxilio de otros expertos, se presenta ahora en este Motu proprio». El MI está datado el 15-VIII-2015.

¹ Cfr. <http://visnews-es.blogspot.com.es/2014/09/comision-especial-de-estudio-para-la.html>.

Con excepción del auxilio de expertos (cuyos nombres no se conocen) que revisó la propuesta de la Comisión, no se tienen noticias de que hayan intervenido otras instancias. En el proyecto de reforma, que se autodefine como auspiciado por el sínodo extraordinario de la familia de 2014, tampoco participaron los padres sinodales, aunque se tuvieran en cuenta algunas de sus propuestas. De la nueva normativa ya promulgada, el Decano de la Rota Romana la presentó en el Sínodo de 2015.

Por lo demás, si se tiene en cuenta las fechas, 27-VIII-2014 (constitución de la Comisión) y 15-VIII-2015 (fecha del m.p.), en menos de un año dio tiempo a su elaboración, revisión y publicación.

2. LAS NUEVAS NORMAS

El conjunto de la nueva normativa ha ido creciendo con el paso del tiempo y parece que todavía debemos aguardar otros cambios como la anunciada adaptación de las normas rotales, como dice el criterio VII del preámbulo del MI².

En el momento en que se escriben estas páginas, la reforma se contiene en el siguiente complejo normativo de diferente valor:

1º m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, 15-VIII-2015³. Son los nuevos cánones sobre el proceso de nulidad de matrimonio.

2º *Reglas de procedimiento para tratar las causas de nulidad de matrimonio*. Acompañan al MI, por considerarse necesarias para la correcta y esmerada aplicación de la ley renovada⁴.

3º *Rescriptum ex audientia SS.mi*, 11-XII-2015⁵. Establece la prevalencia del MI por encima de cualquier otra ley vigente, general, particular o especial. Además, se otorgan privilegios a la Rota Romana, etc.

4º *Subsidio aplicativo* del MI⁶ de carácter práctico interpretativo, tiene la finalidad de salir al paso de las posibles complicaciones que puedan surgir en

² «VII. *La apelación a la Sede Apostólica*. – (...) La ley propia de la Rota Romana será adecuada lo antes posible a las reglas del proceso reformado, dentro de los límites de lo necesario».

³ Para su consulta: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html.

⁴ Cfr. MI, in fine. Las citaremos como *Reglas de procedimiento* y el artículo correspondiente.

⁵ <http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/12/11/0981/02193.html>.

⁶ TRIBUNAL APOSTÓLICO DE LA ROTA ROMANA, *Subsidio aplicativo* del Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, Ciudad del Vaticano, enero de 2016. Lo citaremos como *Subsidio aplicativo* seguido de la página correspondiente.

la puesta en práctica de las nuevas normas del MI. Fue enviado a todos los Obispos.

La reforma ha planteado ciertas dudas sobre aspectos de su aplicación. La resolución de esas cuestiones, cuando han sido propuestas mediante consultas privadas, recae en el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos (PCTL) o en el Tribunal de la Signatura Apostólica. Ambos organismos han sido consultados y nos haremos eco de las cuestiones, dudas y respuestas ofrecidas. La PCTL, a través de su página web⁷, ha dado información de estos asuntos.

3. LOS CRITERIOS FUNDAMENTALES DE LA REFORMA

La reforma de los procesos de nulidad matrimonial propiciada por el papa Francisco se asienta en unos criterios fundamentales que han sido recogidos en el preámbulo del MI. Resumidamente son los siguientes:

1º Se suprime la necesidad de contar con dos sentencias conformes *pro nullitate* para contraer nuevas nupcias.

2º El Obispo no necesita el permiso de la Conferencia Episcopal para encomendar las causas de nulidad matrimonial, en caso de imposibilidad de constitución de un tribunal colegial, a un juez único que sea clérigo.

3º Se intenta hacer más evidente que el mismo Obispo en su Iglesia es juez. Que no deje la función judicial en materia matrimonial completamente delegada a los oficios de la curia. En concreto, a él se le encomienda juzgar personalmente de la nulidad de los matrimonios que se resuelvan por el nuevo proceso más breve.

4º Se crea un nuevo proceso, llamado más breve, para resolver los casos de nulidad más evidente, de los que juzga, como he dicho, sólo el Obispo.

5º Como signo distintivo de la sinodalidad en la Iglesia, se propone la restauración de la apelación a la Sede del Metropolitano.

6º Se les pide a las Conferencias Episcopales que «respeten absolutamente el derecho de los Obispos de organizar la potestad judicial en la propia Iglesia particular» (MI, Preámbulo), al mismo tiempo que se les encomienda una doble misión: estimular a los obispos a poner en práctica la reforma del proceso matrimonial; y asegurar la gratuidad de los procesos.

⁷ <http://www.delegumtextibus.va/content/testilegislativi/it/risposte-particolari/procedure-per-la-dichiarazione-della-nullita-matrimoniale.html>.

7º Se mantiene la apelación a la Rota Romana. Y se adelanta una futura reforma de ley propia de la Rota Romana para adecuarla a las nuevas normas del MI.

8º Se decide promulgar en forma separada las normas para reformar la disciplina de los procesos matrimoniales en el CCEO.

4. MOTIVOS DE LA REFORMA DE LOS PROCESOS DE NULIDAD MATRIMONIAL

Las razones que han propiciado la reforma de los procesos de nulidad matrimonial son:

a) *La preocupación por la salvación de las almas*: «es la preocupación por la salvación de las almas, que –hoy como ayer– continúa siendo el fin supremo de las instituciones, de las leyes, del derecho, lo que impulsa al Obispo de Roma a ofrecer a los Obispos este documento de reforma, en cuanto ellos comparten con él el deber de la Iglesia de tutelar la unidad en la fe y en la disciplina con respecto al matrimonio, eje y origen de la familia cristiana» (MI, Preámbulo).

b) *La enorme cantidad de fieles que queriendo arreglar su conciencia no encuentran la cercanía física o moral para ello*: «Alimenta el estímulo reformador el enorme número de fieles que, aunque deseando proveer a la propia conciencia, con mucha frecuencia se desaniman ante las estructuras jurídicas de la Iglesia, a causa de la distancia física o moral; por tanto, la caridad y la misericordia exigen que la misma Iglesia como madre se haga accesible a los hijos que se consideran separados» (MI, Preámbulo).

c) *La petición de los padres sinodales de abreviar y hacer más accesibles las medidas judiciales*: «En este sentido se dirigieron también los votos de la mayoría de mis Hermanos en el Episcopado reunidos en la reciente asamblea extraordinaria del Sínodo, que solicitaron procesos más rápidos y accesibles» (MI, Preámbulo)⁸.

El Decano de la Rota Romana, en un artículo publicado de *L'Osservatore romano*, de 9-IX-2015, señalaba que para comprender la tensión teológico-jurídica que anima el MI es indispensable acoger la novedad del pontificado de Francisco, que proviene de una doble centralidad: el Evangelio que pone en el centro a los pobres y, de otra, la comprensión del ejercicio del ministerio como diaconía.

⁸ Cfr. *Relatio Synodi* 2014, nn. 48 y 49.

«Así Francisco –escribía–, con esta ley fundamental da el verdadero inicio a su reforma: poniendo al centro a los pobres, es decir los divorciados casados obligados o considerados lejanos, y pidiendo a los obispos una real *metànoia*. Es decir, una “conversión”, un cambio de mentalidad que los convenza y sustente a seguir la invitación de Cristo, presente en su hermano, el obispo de Roma, de pasar del restringido número de pocos millares de nulidad a aquel desmedido de infelices que pudieran tener la declaración de nulidad –por la evidente ausencia de fe como puente hacia el conocimiento y por lo tanto la libre voluntad de dar el consentimiento sacramental– pero que son dejados fuera por el vigente sistema».

Parece, por tanto, que la razón fundamental que impulsa esta reforma procesal es la existencia de un desmesurado número de fieles que pudiendo obtener la declaración de nulidad de su matrimonio (por la evidente falta de fe con la que contrajeron matrimonio) quedan excluidos por el hasta ahora vigente sistema tutelar del CIC.

Del Pozzo ha estudiado las estadísticas de las causas de nulidad de 2001-2005⁹. Con una leve variación del 2% en el periodo contemplado, la inmensa mayoría de las sentencias son *pro nullitate*¹⁰. Y el 90% de las causas invocan como capítulo de nulidad las incapacidades del c. 1095, 2º y 3º¹¹.

5. CELERIDAD Y PROCESO JUDICIAL NO ADMINISTRATIVO

«He decidido establecer con este Motu proprio disposiciones con las cuales se favorezca no la nulidad de los matrimonios, sino la celeridad de los procesos y, no en menor medida, una adecuada simplificación, de modo que, a causa de un retraso en la definición del juicio, el corazón de los fieles que esperan la clarificación del propio estado no quede largamente oprimido por las tinieblas de la duda» (MI, Preámbulo).

⁹ DEL POZZO, M., «Statistiche delle cause di nullità matrimoniale 2001-2005: “vecchi” dati e “nuove” tendenze», en FRANCESCHI, H. y ORTIZ, M. A. (cur.), *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, Roma: EDUSC, 2009, 451-479.

¹⁰ *Ibid.*, 73-79.

¹¹ *Ibid.*, 76. «D'altra parte desta, evidentemente, preoccupazione il fatto, per esempio, che un tribunale giudichi molte cause sempre o quasi sempre pro nullitate matrimonii e ciò sempre o quasi sempre per una delle incapacità psichiche di cui al can. 1095»: DANEELS, F., «Osservazioni sul processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio», *Quaderni di diritto ecclesiale* 14 (2001) 79.

En efecto, la nueva reglamentación ha procurado imprimir una mayor celeridad a los procesos con diferentes medidas, como son, entre otras, los cambios en los fueros de competencia para las causas de nulidad de matrimonio (c. 1672); encomendar los trámites de admisión y decreto de fórmula de la duda al Vicario judicial (cc. 1676 y 1685); la supresión de la obligación de la doble sentencia conforme para contraer nuevas nupcias (c. 1679) y, sobre todo, la creación de un nuevo proceso más breve ante el Obispo diocesano para determinados casos en los que la nulidad es manifiesta (cc. 1683-1687).

Todas estas medidas se realizan con la intención de conservar siempre el carácter judicial de la decisión sobre la nulidad del matrimonio. En efecto, como expresamente expone el preámbulo del MI:

«He hecho esto, sin embargo, siguiendo las huellas de mis Predecesores, los cuales han querido que las causas de nulidad sean tratadas por vía judicial, y no administrativa, no porque lo imponga la naturaleza de la cosa, sino más bien porque lo exige la necesidad de tutelar en el máximo grado la verdad del vínculo sagrado: y eso se asegura precisamente con las garantías del orden judicial».

Ahora bien, al menos desde 1908 la Congregación para los Sacramentos era competente para decidir por vía administrativa sobre la validez del matrimonio¹². Así se mantuvo a lo largo de los años hasta que la REU¹³ transfirió dicha competencia a la Signatura Apostólica. Y aunque no se contempló en posteriores desarrollos legislativos universales la Signatura Apostólica siguió ejerciendo dicha competencia, más tarde acogida de modo expreso en la DC (art. 5 § 2) y en el art. 118 de la ley propia de la Signatura Apostólica¹⁴.

Se trata de una praxis que lleva mucho tiempo vigente. En consecuencia, la afirmación «he hecho esto, sin embargo, siguiendo las huellas de mis Predecesores, los cuales han querido que las causas de nulidad sean tratadas por vía judicial, y no administrativa» debe conjugarse con la resolución por vía administrativa de las causas matrimoniales encomendada a la Signatura Apostólica.

¹² Cfr. Pío X, Const. Ap. *Sapienti Consilio*, 29-VI-1908: AAS 1 (1909) 7-19, *vid.* el n. 3 § 3.

¹³ Cfr. PABLO VI, Const. Ap. *Regimini Ecclesiae Universae*, 15-VIII-1967: AAS 59 (1967) 885-928. *Vid.* el n. 105.

¹⁴ Cfr. BENEDICTO XVI, m.p. «*Antiqua ordinatione*», *quo Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae «lex propria» promulgatur*, 21-VI-2008: AAS 100 (2008) 513-538.

En opinión de Miras, «desde el punto de vista técnico, parece claro que lo que rechaza el motu proprio bajo la expresión vía administrativa no es cualquier tipo de actuación de la potestad ejecutiva, sino sólo y concretamente el tipo más paradigmático de actuación administrativa, que resulta encuadrable propiamente en la “función administrativa”: es decir, aquella función pública consistente en poner los medios de que la autoridad dispone para resolver necesidades concretas en los ámbitos de su competencia, actuando conforme a criterios de oportunidad, utilidad, posibilidad, etc., y con el margen, más o menos amplio, de discrecionalidad que el derecho le confiere»¹⁵.

Posiblemente, con el nuevo proceso más breve, los casos que viene conociendo la Signatura Apostólica puedan tratarse mediante el proceso ante el Obispo diocesano, porque los requisitos que se exigen para ambos son bastante parecidos. La razón que propiciaba la resolución de la nulidad por la Signatura Apostólica era la no existencia de un tribunal local competente, dificultad que ahora parece salvable, con el proceso más breve, y las especificaciones del *Subsidio aplicativo* acerca de cómo proceder cuando no se puede constituir inmediatamente el tribunal propio.

El *Subsidio aplicativo* articula cuatro soluciones¹⁶ para solventar las dificultades de constitución del tribunal para el proceso más breve. La más extrema de las cuatro (que debe considerarse muy raro) es «que el Obispo no tenga a nadie en la propia diócesis y que no pueda tampoco acceder al auxilio de un clérigo con título de otra diócesis, el Obispo puede confiar la instrucción de la causa a un tribunal cercano»¹⁷.

Parece, por tanto, bastante factible que con esta regulación sean derivadas al proceso más breve –cumplidos los requisitos del c. 1683– las causas que hasta ahora resolvía la Signatura Apostólica.

6. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL MI

Cuando se tuvo conocimiento de la nueva regulación para los procesos de nulidad de matrimonio, en algunos países con normativa propia (sobre todo

¹⁵ Cfr. MIRAS, J., *La confirmación de la vía judicial para las causas de nulidad del matrimonio en el m.p. Mitis Iudex. Conferencia en el XXVIII Curso de Actualización en Derecho canónico, Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra, 12-13 de noviembre de 2015*: <http://dadun.unav.edu/handle/10171/39400>. No tiene enumeración de páginas.

¹⁶ *Subsidio aplicativo*, 19-20.

¹⁷ *Ibid.*

en Italia¹⁸) surgió la duda acerca de la vigencia de esas normas especiales después del MI. La PCTL dio, en un primer momento, respuestas particulares a cuestiones que se le planteaban¹⁹.

El 11-XII-2015, mediante el rescripto papal, queda claro que «Las leyes de reforma del proceso matrimonial más arriba citadas abrogan o derogan cualquier ley o norma contraria hasta ahora vigente, general, particular o especial, eventualmente aprobada también en forma específica (por ejemplo, el Motu Proprio “Qua cura”, dado por mi predecesor Pío XI en tiempos muy distintos de los actuales)»²⁰.

En Italia, a pesar de esa disposición, continúan con ciertos problemas para adecuarse al MI, como se ve en la consulta del Secretario de la Conferencia Episcopal Italiana a la Signatura Apostólica:

«Ha sottoposto due specifiche questioni attinenti alla competenza dei Tribunali Regionali in Italia:

1. “a trattare le cause radicate nei Tribunali Ecclesiastici Regionali prima dell’8 Dicembre”;
2. “ad accogliere e valutare i libelli presentati dall’8 dicembre in poi”»²¹.

En respuesta a dichas cuestiones la Signatura remitió un *votum periti*, en el que se afirma:

«Il Rescritto ha affermato che il motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* abroga o deroga ogni legge o norma contraria finora vigente (come ad esempio il motu proprio *Qua cura*).

È abrogata, pertanto, la forza vincolante di *Qua cura*, certamente per quanto vieta tribunali diocesani per le cause di nullità matrimoniali ed impone un tribunale per tutta la Regione per le cause di nullità matrimoniale – escludendo, per esempio, tribunali interdiocesani soltanto per alcune diocesi.

Questo non significa che i Tribunali Regionali esistenti siano aboliti dall’8 dicembre 2015».

¹⁸ Para Italia, Pío XI (m.p. *Qua cura*, 8-XII-1938: AAS 30 [1938] 410-413), reservó las causas matrimoniales a los tribunales regionales.

¹⁹ Cfr. *Respuestas*, 13-X-2015, Prot. n. 15157/2015; 18-XI-2015, Prot. n. 15201/2015. Pueden consultarse en <http://www.delegumtextibus.va>.

²⁰ Ver nt. 5.

²¹ TRIBUNAL DE LA SIGNATURA APOSTÓLICA, *Respuesta*, 22-XII-2015, Prot. n. 51232/15 VAR.

Las regiones eclesiásticas existentes en Italia han adoptado decisiones diversas en relación a los tribunales regionales²², los cuales, como dice el *votum periti* citado, no han sido abolidos si se constituyeron antes de la entrada en vigor del MI. Pero queda abrogado el veto para que los tribunales diocesanos italianos conozcan causas de nulidad de matrimonio. La CEI en una circular a los Vicarios judiciales de los tribunales regionales habla ya de la «*costituzione degli eventuali tribunali diocesani e interdiocesani per le cause matrimoniali*»²³.

En España, al Tribunal de la Rota de la Nunciatura también le afectan las disposiciones del MI, de ahí que sea oportuna una adaptación como la ya anunciada para la Rota Romana en el n. VII in fine del preámbulo de la MI. La adaptación del m.p. *Nuntiaturae Apostolicae in Hispania*, en efecto, se hace también necesaria porque no son pocos los aspectos que han sido innovados: competencias en primer y segundo grado, procedimiento y tipos de procesos, gratuidad, etc.

7. INVESTIGACIÓN PREJUDICIAL O PASTORAL (ARTS. 1-5)

El Sínodo de los Obispos ha manifestado la necesidad de «poner a disposición de las personas separadas o de las parejas en crisis, un servicio de información, de asesoría y de mediación, vinculado con la pastoral familiar, que podrá también acoger a las personas con ocasión de la investigación preliminar al proceso matrimonial (cfr. MI, arts. 2-3)» (*Relatio finalis Synodi*, n. 82).

DC ya contemplaba una asistencia de ese tipo en el art. 113, pero parece que el MI quiere una más estrecha relación entre este tipo de asesoramiento y la pastoral familiar, por ello se opta por incluirlo en la solicitud que el Obispo y los párrocos deben tener hacia los fieles separados o divorciados que hayan abandonado la práctica religiosa (cfr. *Reglas de procedimiento*, art. 1).

La labor de asesoramiento puede derivar en una verdadera investigación de tipo pastoral para aquellos que están convencidos de la nulidad de su matrimonio y se orienta a recoger los elementos útiles para la incoación de un posible proceso de nulidad (cfr. *Reglas de procedimiento*, art. 2).

²² Cfr. BONI, G., «La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte prima)», *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 10 (2016) 12-44: http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=818&Itemid=40.

²³ CONFERENCIA EPISCOPAL ITALIANA, *Circular*, 17-XII-2015. Prot. n. 853/2015.

Esta investigación debe encomendarse, por el Ordinario del lugar, a personas idóneas, dotadas de competencia, aunque no exclusivamente jurídico-canónica. Entre ellas estará el párroco o el que preparó a los cónyuges para la celebración del matrimonio (cfr. *Reglas de procedimiento*, art. 3).

La diócesis, o varias juntas, pueden constituir una estructura estable que preste estos servicios y, si es el caso, elaborar un Vademécum que oriente a los investigadores en su trabajo (cfr. *Reglas de procedimiento*, art. 3).

La investigación pastoral tiene como finalidad recoger todos los elementos útiles para la eventual introducción de la causa (cfr. MI, *Reglas de procedimiento*, art. 4) y se cierra, en efecto, con la presentación del libelo (cfr. MI, *Reglas de procedimiento*, art. 5). Debe investigarse si ambos cónyuges están de acuerdo en pedir la nulidad (cfr. MI, *Reglas de procedimiento*, art. 4).

El *Subsidio aplicativo* explica que «este camino de “acompañamiento” puede ayudar a superar las crisis matrimoniales de manera satisfactoria»²⁴. Finalidad deseable, aunque la regulación que se acaba de explicar apunta más bien a una cierta inclinación hacia la solución judicial que a la reconciliación pastoral, en consonancia con el nuevo c. 1675.

8. NOVEDADES INTRODUCIDAS EN EL PROCESO ORDINARIO DE NULIDAD DE MATRIMONIO

a) *Fuero competente* (c. 1672)

Una novedad importante la encontramos en el c. 1672. Regula el canon los títulos de competencia para las causas de nulidad de matrimonio. Para situar en su contexto histórico la materia conviene recordar que los codificadores del 83 «se encontraron con una situación jurídicamente degradada, a la que trataron de poner remedio; por ejemplo, al “tráfico de causas” realizado por algunos abogados, quienes sometían las causas de sus clientes a tribunales incompetentes, o con una competencia ficticia, porque tales tribunales (...) ofrecían la seguridad de obtener dos sentencias conformes *pro nullitate*»²⁵. Sucesos de ese tipo se dieron en España y propiciaron la intervención expresa de

²⁴ *Subsidio aplicativo*, 14.

²⁵ LLOBELL, J., «Comentario al título I: de los procesos matrimoniales», en MARZOA, Á., MIRAS, J. y RODRÍGUEZ-OCAÑA, R. (eds.), *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, IV/2, 3 ed. Pamplona: Eunsa, 2002, 1819. El *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico* lo citaremos abreviadamente como *ComExe*, seguido del volumen y páginas.

la Signatura Apostólica²⁶. Para evitar estas desviaciones, el art. 110 DC prohibió «a los abogados y a los procuradores: (...) 4º sustraer causas a los tribunales competentes o actuar de cualquier modo con fraude de ley».

Después del CIC de 1983 los fueros matrimoniales han sido objeto de interpretaciones auténticas de la PCTL y de decretos interpretativos de la Signatura Apostólica²⁷. Todo este elenco doctrinal decantó en los arts. 8 a 21 DC.

El actual c. 1672 preceptúa que «Para las causas de nulidad de matrimonio no reservadas a la Sede Apostólica, son competentes: 1º el tribunal del lugar en que se celebró el matrimonio; 2º el tribunal del lugar en el cual una o ambas partes tienen el domicilio o el cuasidomicilio; 3º el tribunal del lugar en que de hecho se han de recoger la mayor parte de las pruebas»²⁸. Estos títulos de competencia son equivalentes, salvado en cuanto sea posible el principio de la proximidad entre el juez y las partes (art. 7 *Reglas de procedimiento*).

La reforma asume el fuero del actor en toda su extensión (domicilio y cuasidomicilio) y suprime las cautelas anteriormente existentes para los fueros del actor y de las pruebas, que tenían como fin la salvaguarda el efectivo ejercicio del derecho de defensa de la parte demandada y evitar la «fuga de causas».

Bunge explica que «teniendo en cuenta la necesidad de acercar lo más posible los tribunales a los fieles necesitados de sus servicios, (...) se han ampliado y simplificado los títulos de competencia que indican los tribunales a los que se puede acudir para pedir la declaración de la nulidad de un matrimonio»²⁹.

La proximidad mencionada por el art. 7 no es un título formal de fuero, su falta no origina incompetencia del tribunal. Más bien parece un criterio de orden entre los diversos títulos de competencia, que puede ser de complicado ajuste. Porque la proximidad del tribunal a las partes (de ambas) es posible cuando son colitigantes, más complicada se presenta su determinación cuando el actor invoca su propio fuero ante un juez próximo a él, pero no a la parte demandada. Me inclino a pensar que la proximidad debe entenderse, en caso de duda, prioritariamente del tribunal más cercano al demandado.

Parece que la supresión de las cautelas del anterior c. 1673 para los fueros del actor y de las pruebas, busca evitar «las demoras a veces muy prolon-

²⁶ Cfr. «Documentos de la Signatura Apostólica sobre causas matrimoniales españolas tratadas en el extranjero», *Revista Española de Derecho Canónico* 36 (1980) 71-80.

²⁷ Cfr. LLOBELL, J., «Comentario al c. 1673», *ComExe*, IV/2, 1837-1848.

²⁸ Además, hay que tener en cuenta el art. 7 de las *Reglas de procedimiento* y el *Subsidio aplicativo*.

²⁹ BUNGE, A. W., *Presentación del nuevo proceso matrimonial*, 14: se encuentra en www.awbunge.com.ar/Nuevo-Proceso-Matrimonial.pdf.

gadas»³⁰ que se producían. Es cierto que esos retrasos pueden existir, pero pienso que cuando la alternativa a la rapidez afecta al efectivo ejercicio del derecho de defensa de la parte demandada, debe prevalecer éste.

Boni ha puesto en relación la nueva regulación del fuero para las causas de nulidad matrimonial con los problemas que podrían surgir en el reconocimiento de las sentencias de nulidad matrimonial por la autoridad civil, precisamente porque no se ha facilitado el derecho de defensa de la parte demanda³¹.

b) *Constitución del tribunal (c. 1673)*

El nuevo canon que regula la constitución del tribunal lleva a la práctica los principios segundo y tercero de la reforma, que centralizan en la figura del Obispo el servicio a la justicia.

Explica el *Subsidio aplicativo*:

«— *El Obispo mismo es juez.* El Obispo en su Iglesia, como padre y juez, es icono de Cristo-Sacramento. Por lo tanto, él sea personalmente juez, dando un signo de la potestad sacramental. Esto vale especialmente para el proceso más breve: (...) él interviene como juez en los casos en los cuales es evidente la nulidad. La verdad del juicio es garantizada, ya que personas cualificadas asisten al Obispo, el cual asume luego la certeza moral sobre la sentencia a pronunciar.

»— *El juez único es constituido por el Obispo.* El proceso judicial requiere, si es posible, el juez colegial; pero es potestad del Obispo nombrar un juez único, siempre clérigo, en primera instancia, en forma estable o en los casos singulares. El Obispo deberá vigilar de todas maneras que no se incurra en ninguna forma de laxitud»³².

El Obispo tiene un derecho/deber de erigir su tribunal diocesano y, por lo tanto, le asiste también el derecho de desligarse del tribunal interdiocesano del que forma parte, para constituir su propio tribunal o para ejercer su facultad de acceder a un tribunal más cercano (cfr. *Reglas de procedimiento*, art. 8). Hay una insistencia clara para que cada Obispo diocesano tenga su propio tri-

³⁰ BUNGE, A. W., *Presentación del nuevo proceso*, 15.

³¹ Cfr. BONI, G., «La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte terza)», *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 11 (2016) 4-5.

³² *Subsidio aplicativo*, 9-10.

bunal y ponga los medios para constituirlo, por ejemplo, formando personal al servicio de los órganos de justicia en la Iglesia diocesana. El tribunal colegial lo preside un juez clérigo, los demás jueces pueden ser laicos (c. 1673 § 3).

Cuando se encuentran dificultades para el establecimiento del tribunal diocesano colegial, se ofrecen soluciones diversas, según los casos, distinguiendo entre el proceso ordinario y el proceso más breve.

En el caso de que no fuera posible formar el propio tribunal colegial, el «Obispo podrá *elegir acceder a un tribunal cercano*, sea diocesano o interdiocesano, teniendo siempre el máximo respeto por la proximidad a los fieles. En tal caso, el Obispo de todas formas deberá preocuparse de formar cuanto antes a los operadores que le permitirán erigir lo más pronto posible un tribunal propio, incluso mediante cursos de formación permanente y continua»³³.

Para el proceso más breve las soluciones son más elaboradas por el mismo desarrollo de ese proceso, donde el Obispo diocesano dicta sentencia, pero el resto de los trámites se encomienda a personas expertas, comenzando por el Vicario judicial. Por eso, los casos se resuelven dependiendo de si en la diócesis existe o no Vicario judicial; o en su defecto, si el Obispo puede acudir a alguna persona experta de la propia diócesis o de una diócesis cercana; y, en fin, el caso más inusual y raro que no exista ninguna persona a la que pueda acudir, entonces se autoriza a encomendar la instrucción a un tribunal cercano.

c) *Introducción de la causa (c. 1675)*

El derecho de impugnación del matrimonio sigue regulado en el c. 1674 y conserva su tenor literal. Hay, por el contrario, una nueva redacción para el c. 1675:

«El juez, antes de aceptar una causa, debe tener la certeza de que el matrimonio haya fracasado irreparablemente, de manera que sea imposible restablecer la convivencia conyugal».

Hasta ahora la legislación vigente había evitado el término *fracaso* en relación con las causas de nulidad de matrimonio. Ni el CIC de 1983 ni la DC empleaban esa terminología, posiblemente para no dar soporte a la «tesis según la cual el fracaso mismo de la vida conyugal debería hacer presumir la in-

³³ *Ibid.*, 18.

validez del matrimonio»³⁴. Por desgracia, enseñaba Juan Pablo II, «la fuerza de este planteamiento erróneo es a veces tan grande, que se transforma en un prejuicio generalizado, el cual lleva a buscar las pruebas de nulidad como meras justificaciones formales de un pronunciamiento que, en realidad, se apoya en el hecho empírico del fracaso matrimonial. Este formalismo injusto de quienes se oponen al *favor matrimonii* tradicional puede llegar a olvidar que, según la experiencia humana marcada por el pecado, un matrimonio válido puede fracasar a causa del uso equivocado de la libertad de los mismos cónyuges»³⁵.

La constatación del *fracaso irreparable* no se debe confundir, por tanto, con una presunción de nulidad por parte del tribunal³⁶, sino como una razón o causa que dispensa al juez de tomar las medidas alentadas por el legislador con el fin de evitar «en lo posible los litigios» (c. 1446)³⁷. En efecto, el anterior c. 1676 se prescribía que, siempre que viera una esperanza de éxito, el juez debía emplear «los medios pastorales para inducir a los cónyuges, si es posible, a convalidar su matrimonio y a restablecer la convivencia conyugal».

«La experiencia dice que, cuando se llega a la causa de nulidad, es ya del todo imposible recomponer la convivencia. Por tanto, bastará que el juez, antes de aceptar la causa, posea la certeza de que el matrimonio ha fracasado irreparablemente y es imposible restablecer la convivencia conyugal» (*Subsidio aplicativo*, 23).

El enfoque en esta nueva regulación, que tiene una clara finalidad pastoral con el fin de acercar a la Iglesia a muchos fieles alejados por su situación matrimonial irregular, es menos esperanzador que su precedente porque infravalora la eficacia de las medidas pastorales en el momento de iniciar el proceso y mientras haya esperanza de éxito, y se conforma con una objetividad basada en la experiencia.

La tutela del principio de comunión eclesial es un deber de todo juez eclesiástico³⁸. El c. 1446 –evitar los juicios– emerge de la eclesiología de comu-

³⁴ JUAN PABLO II, «Discurso a la Rota Romana», 29-I-2004, n. 5, en LIZARRAGA, A., *Discursos Pontificios a la Rota Romana*, Pamplona: Euns, 2012, 517.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Cfr. LLOBELL, J., *Los procesos matrimoniales en la Iglesia*, Madrid: Rialp, 2014, 78-83; BAÑARES, J. I., «El “favor matrimonii” y la presunción de validez del matrimonio contraído», *Ius Canonicum* 45 (2005) 243-257.

³⁷ Cfr. GROCHOLEWSKI, Z., «La función del juez en las causas matrimoniales», *Ius Canonicum* 45 (2005) 13-33.

³⁸ Cfr. STANKIEWICZ, A., «I doveri del giudice», en BONNET, P. A. y GULLO, C. (cur.), *Il processo matrimoniale canonico*, 2 ed. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1994, 304-308.

nión³⁹ y se convierte en fundamento de todo el sistema procesal canónico. En la preparación del CIC de 1983 algunos consultores consideraron una norma inútil el intento de reconciliación entre los cónyuges⁴⁰, cuando en realidad éste es el primer deber al servicio del amor⁴¹. No es éste un deber teórico, sino que requiere un cambio de mentalidad y actuar, de modo particular, cuando el juez encuentra a las partes en el momento de la presentación de la demanda⁴².

d) *Admisión de la demanda (c. 1676)*

En la fase preliminar del proceso ordinario de nulidad hay un notable cambio, porque ahora toda se encomienda al Vicario judicial. Éste recibe el libelo que admite o rechaza mediante decreto; cita a las partes que tienen 15 días para responder; fija la fórmula de la duda y establece si la causa debe ser tratada por el proceso ordinario o por el breve. Si decide que se sustancie por el proceso ordinario, en el mismo decreto designa a los jueces del tribunal colegial o al juez único con los dos asesores. Si la decisión se inclina por el proceso más breve, se procederá a tenor del c. 1685⁴³.

Con este nuevo proceder hay que replantearse el sistema de recursos que se pueden suscitar en el transcurso de todas estas actuaciones, así como la resolución de los incidentes que también se pueden introducir durante esta etapa inicial del proceso. En el CIC de 1983, recibida la demanda, la primera actuación del Vicario judicial era constituir el turno de jueces que integraban el tribunal colegial al cual le venía atribuido, en su conjunto o a uno de sus miembros, las actuaciones preliminares. Contra los decretos del presidente del tribunal o del ponente se daba recurso al colegio, y contra algunos decretos del colegio, no sustanciados *expeditissime*, se daba recurso al tribunal de apelación. Si no se pudo constituir un tribunal colegial, el juez único realizaba todas esas actuaciones y los recursos contra sus decisiones se presentaban ante el tribunal de apelación. Este sistema debe ser repensado ahora porque el tribunal, sea colegial o unipersonal, no se constituye hasta después de la fijación de la fórmula de la duda y toda la fase preliminar del proceso queda encomendada al Vicario judicial.

³⁹ Cfr. CORECCO, E., «Fondamenti ecclesiologici del nuovo Codice di diritto canonico», *Concilium* 22 (1986) 27.

⁴⁰ Cfr. *Communicationes* 11 (1979) 260.

⁴¹ Cfr. JUAN PABLO II, «Discurso a la Rota Romana», 28-I-1982, n. 7, en LIZARRAGA, A., *Discursos*, 398.

⁴² Cfr. STANKIEWICZ, A., *I doveri del giudice*, 307-308.

⁴³ Cfr. *Subsidio aplicativo*, 27.

e) *Confesión judicial de parte. Declaración de un solo testigo (c. 1678)*

¿Cuáles son las novedades del Motu proprio sobre la evaluación de las pruebas? Se pregunta el *Subsidio*. Y añade:

«El Motu proprio introduce algunas novedades sobre este punto. En primer término, la nueva ley de Francisco refuerza el principio del Código de 1983 con respecto al valor de las *declaraciones de las partes*, que, si eventualmente poseen testigos de credibilidad, considerados todos los indicios y los adminículos, en ausencia de otros elementos que los refuten, pueden asumir valor de *prueba plena*.

También la deposición de *un solo testigo* puede hacer prueba plena, si se trata de un testigo cualificado que depone sobre cosas hechas de oficio, o bien las circunstancias de hechos y de personas lo sugieren»⁴⁴.

La confesión judicial y las declaraciones de parte están reguladas en el c. 1536, donde se determina qué es la confesión y el valor que pueda tener, así como las declaraciones de parte. El principio codicial, dice el *Subsidio aplicativo*, queda reforzado por el nuevo c. 1678.

Veámoslo. Según el c. 1536 § 2 «en las causas que afectan al bien público, la confesión judicial y las declaraciones de las partes que no sean confesiones pueden tener fuerza probatoria, que habrá de valorar el juez juntamente con las demás circunstancias de la causa, pero no se les puede atribuir fuerza de prueba plena, a no ser que otros elementos las corroboren totalmente».

Del texto deduzco que el principio del CIC de 1983 es que en las causas de nulidad de matrimonio (porque afectan al bien público) la confesión judicial y las declaraciones de parte «pueden tener fuerza probatoria» que el juez valorará. Es decir, la valoración queda sometida al juicio de la conciencia del juez en el conjunto de los medios de prueba aportados al proceso. Por esto, la referencia a la carencia del valor de prueba plena, que pronuncia el c. 1536 § 2 («a no ser que otros elementos las corroboren totalmente»), no viene más que a sentar la afirmación de que el juez adquirirá plena certeza moral gracias a la observación y valoración conjunta de la prueba practicada.

Por su parte, para el nuevo c. 1678 § 1 «En las causas de nulidad de matrimonio la confesión judicial y las declaraciones de las partes, sostenidas por eventuales testigos sobre la credibilidad de las mismas, pueden tener valor de

⁴⁴ *Subsidio aplicativo*, 28.

prueba plena, que debe valorar el juez considerando todos los indicios y ad-
minículos, si no hay otros elementos que las refuten».

Aquí el principio general es que la confesión y declaraciones de parte
«pueden tener valor de prueba *plena*». Hemos pasado de «pueden tener fuer-
za probatoria» (c. 1536 § 2) a «pueden tener valor de prueba plena» (c. 1678
§ 1). Ambas valoraciones quedan sin embargo sometidas a la apreciación del
juez, pero mientras el c. 1536 § 2 no califica la fuerza probatoria, en el c. 1678
§ 1, expresamente, se le dice al juez que lo que debe estimar es si tiene valor de
prueba *plena*, es decir, que acredita plenamente la verdad del hecho controver-
tido. El nuevo canon es coherente con el sistema de libre valoración de la prue-
ba del c. 1608 §§ 2 y 3 asumido por el CIC⁴⁵, pero entiendo que es más acer-
tada la redacción del c. 1536 § 2, por ser más coherente con dicho principio.

En relación con *el valor de la declaración de un solo testigo*, podemos apre-
ciar que las redacciones del CIC de 1983 (c. 1573) y la nueva norma codicial
(c. 1678 § 2) también hacen un juego diverso de la dialéctica entre principio
general y excepciones a ese principio. Para el c. 1573 «la declaración de un
solo testigo *no tiene fuerza probatoria plena*, a no ser que...»; por el contrario,
para el c. 1678 § 2 «la deposición de un solo testigo *puede tener fuerza probato-
ria plena*, si se trata...». La excepción del c. 1573 se ha convertido en regla ge-
neral en el c. 1678 § 2. La excepción viene representada por el testimonio de
un testigo «cualificado que deponga sobre lo que ha realizado en razón de su
oficio, o que las circunstancias objetivas o subjetivas persuadan de otra cosa»
(c. 1573). La formulación negativa del c. 1573 frente a la reformada me pare-
ce que tiene a su favor que se asienta en una constante experiencia eclesial (Dt
19,15; Mt 18,16; etc.) y multisecular (*testis unus, testis nullus*⁴⁶) que ha traspas-
ado las fronteras del derecho canónico⁴⁷.

f) *Sentencia en favor de la nulidad (c. 1679)*

«La sentencia que por primera vez ha declarado la nulidad del ma-
trimonio, cumplidos los términos establecidos en los cánones 1630-1633,
se hace ejecutiva» (c. 1679).

⁴⁵ Cfr. DE DIEGO-LORA, C., «La apreciación de la prueba de documentos y confesión judicial en el
proceso de nulidad de matrimonio», *Ius Canonicum* 7 (1967) 529-573.

⁴⁶ Cfr. WERNZ, F. X. y VIDAL, P., *Ius Canonicum*, VI: *De processibus*, Romae: Univ. Gregoriana,
1927, 423.

⁴⁷ Cfr. FERNÁNDEZ ESPINAR, R., *El principio «testis unus testis nullus» en el derecho procesal español*,
Madrid: Imprenta García Blanco, 2005.

Con esta nueva norma desaparece la necesidad de obtener una segunda sentencia confirmatoria para poder contraer ulteriores nupcias, si la sentencia ha declarado por primera vez nulo el matrimonio y se ha producido la preclusión de los plazos para apelar (1630)⁴⁸.

Un par de años antes del MI, el 11-II-2013, Benedicto XVI suspendió temporalmente la necesidad de la doble sentencia conforme ante la Rota Romana: «Las sentencias rotales –decía el n. I del rescripto– que declaran la nulidad del matrimonio serán ejecutivas sin que sea necesaria una segunda decisión conforme»⁴⁹.

La doctrina del c. 1679, con algún retoque, sirve también para las sentencias *pro vinculo*; éstas, cumplidos los plazos de apelación, se hacen firmes. Para revisarlas, se puede recurrir en cualquier momento al tribunal de tercer grado e interponer la nueva proposición de la causa conforme al c. 1644, aduciendo nuevas y graves pruebas y razones, dentro del término perentorio de treinta días desde la impugnación (c. 1681).

La petición de los padres sinodales de una mayor rapidez en la resolución de las causas de nulidad⁵⁰ podría haber influido en la determinación de los plazos de interposición y prosecución, pero no ha sido así y permanecen igual que hasta ahora: 15 días para la interposición y un mes para la prosecución. El CIC de 1917 establecía un plazo de 10 días en lugar de 15 para la interposición (c. 1881 CIC de 1917) y un mes para la prosecución (c. 1883 CIC de 1917). Ya que se quería dar una mayor rapidez, se podría haber recuperado el plazo de 10 días para la interposición y establecer que, tanto para la interposición como para la prosecución, el tiempo se considerara continuo (cc. 201 § 1 y 203).

Si surge una cuestión sobre el derecho de apelación, el c. 1631 determina que se resuelva por el proceso oral y la decisión que adopte el tribunal de

⁴⁸ Acerca de los problemas y futuro de la doble conforme antes del MI, cfr. *La doppia conforme nel processo matrimoniale*, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2003. Cfr. también, ROCA, M., «La reforma del proceso canónico de las causas de nulidad matrimonial: de las propuestas previas a la nueva regulación», *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado* 40 (2016) 11-14.

⁴⁹ Cfr. SECRETARÍA DE ESTADO, *Rescriptum ex audientia SS.mi*, 11-II-2013, N. 208.966. Fue hecho público el 5-III-2013 por el Decano de la Rota Romana. Para su comentario, cfr. LLOBELL, J., «Novità procedurale riguardanti la Rota Romana: la facoltà speciali», en FRANCESCHI, H. y ORTIZ, M. A., *Ius et matrimonium. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, Roma: EDUSC, 2015, 303-316; RODRÍGUEZ-CHACÓN, R., «El *rescriptum ex audientia SS.MI* de 11 de febrero de 2013», *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado* 34 (2014) 1-55.

⁵⁰ Cfr. *Relatio Synodi* 2014, n. 48 y Preámbulo MI. PEÑA GARCÍA, C., «Agilización de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: de las propuestas presinodales al motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* y retos pendientes tras la reforma», *Ius Canonicum* 56 (2016) 41-64.

apelación, que es el competente, no es apelable por haberse dado *expeditissime* (c. 1629, 5º). También aquí se podría haber introducido una mayor agilización mediante la sustitución del proceso oral por el de memoriales (art. 222 § 1 DC), más rápido y suficiente para resolver un incidente de este tipo. «De este modo se procura evitar el abuso generalizado de impugnaciones, en base al *ius appellandi*, que han ocasionado dilaciones y gastos procesales injustificados, con evidente daño para la justicia»⁵¹.

La competencia para recibir apelaciones no ha variado en el supuesto que contemplamos de impugnación de la sentencia, afirmativa o negativa, en el proceso ordinario de nulidad de matrimonio. Así, por ejemplo, cuando no se indica de modo expreso a qué tribunal se apela, se presume realizada a los tribunales ordinarios de segunda instancia de los cc. 1438 y 1439⁵². Esta disposición era aplicada a las causas matrimoniales por medio de los arts. 17, 25, 27 y 283 DC⁵³. Entre esas normas, por ejemplo, se establecía el sistema para resolver los conflictos de competencia entre fueros concurrentes impugnativos. Además, se intentaba atajar el subterfugio –cuando una parte había apelado a la Rota Romana y la otra parte a otro tribunal– de enviar las actas a ese otro tribunal antes de transcurrir los plazos, para forzar la ley de la prevención con el fin de evitar que la causa fuera tratada ante la Rota Romana (cfr. art. 283 § 4 DC).

Desaparecida la necesidad u obligación de la confirmación *pro nullitate* para volver a casarse, no tenía sentido mantener ni el sistema mal llamado de «apelación automática» del antiguo c. 1682 § 1, ni la confirmación por procedimiento abreviado si la sentencia afirmativa se había dictado en primera instancia, a tenor del § 2 de ese mismo canon⁵⁴.

Ahora bien, que haya desaparecido la obligación no quiere decir que esas sentencias no sean apelables. En efecto, «permanece íntegro el derecho de la parte que se considere perjudicada, así como del promotor de justicia y del defensor del vínculo, de interponer querrela de nulidad o apelación contra la misma sentencia, según los cánones 1619-1640» (c. 1680 § 1).

⁵¹ DE DIEGO-LORA, C., «Comentario al c. 1631», en INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA, *Código de Derecho Canónico*. Edición bilingüe y anotada, 8 ed. Pamplona: Eunsa, 2015, 1037.

⁵² Cfr. DE DIEGO-LORA, C. y RODRÍGUEZ-OCAÑA, R., *Lecciones de Derecho Procesal Canónico. Parte general*, Pamplona: Eunsa, 2003, 289.

⁵³ Cfr. MORÁN, C., «Título XII: La impugnación de la sentencia (arts. 269-294)», en MORÁN, C. y PEÑA, C., *Nulidad de matrimonio y proceso canónico*, 533-534.

⁵⁴ Cfr. *La procedura matrimoniale abbreviata*, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1998.

Como en la legislación anterior, la legitimación activa requerida para la apelación es la existencia de un perjuicio o gravamen injustamente inferido por la sentencia⁵⁵. No se requiere de otras razones nacidas de circunstancias particulares –como acontece con la querella de nulidad (cc. 1620 y 1622) o en la *restitutio in integrum* (c. 1645)–, como tampoco son exigidos requisitos de prueba o de argumentos nuevos prescritos en el c. 1644 para el nuevo examen en las causas de nulidad de matrimonio.

g) *Apelaciones meramente dilatorias (c. 1680)*

Una de las novedades del MI en esta temática⁵⁶ es la expresa referencia a las «apelaciones meramente dilatorias»:

«Trascurridos los términos establecidos por el derecho para la apelación y su prosecución, después que el tribunal de la instancia superior ha recibido las actas judiciales, se constituya el colegio de jueces, se designe el defensor del vínculo y se amoneste a las partes para que presenten las observaciones dentro de un plazo establecido; transcurrido ese plazo, el tribunal colegial, si resulta evidente que la apelación es meramente dilatoria, confirme con un decreto la sentencia de primera instancia» (c. 1680 § 2).

Hay que decir, inmediatamente, que toda apelación es dilatoria porque suspende la ejecución de la sentencia recurrida. Por tanto, cuando el nuevo c. 1680 § 2 prevé un desenlace por decreto⁵⁷ en casos de manifiesta dilación, parece que está pensado en un retraso diverso al que es propio de toda apelación, que debe ser acreditado por la parte resistente y razonado por el tribunal en su decreto para proceder como ordena el c. 1680 § 2.

Esta confirmación por decreto, si hay evidencia de una apelación manifiestamente dilatoria, es aplicable tanto a las sentencias *pro nullitate* como *pro vinculo*, porque el canon no distingue.

⁵⁵ El decreto c. Pompedda, 14-XII-1992, representó un caso único y peculiar de interpretación de gravamen necesario para apelar. Cfr. LLOBELL, J., «La necessità della doppia sentenza conforme e l'«appello automatico» ex can. 1682 costituiscono un gravame? Sul diritto di appello presso la Rota Romana», *Ius Ecclesiae* 5 (1993) 602-609.

⁵⁶ Para otras cuestiones implicadas en la apelación de las causas de nulidad en el proceso ordinario cfr., por todos, BONI, G., «La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte terza)», 34-53.

⁵⁷ Parece que hay aquí una reminiscencia del decreto del c. 1682 § 2. Cfr. RODRÍGUEZ-CHACÓN, R., «La ejecutividad de las sentencias afirmativas de nulidad de matrimonio no apeladas», *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado* 40 (2016) 33-34.

No está claro el momento procesal en que el tribunal toma conciencia de la manifiesta dilación, si en el trámite de prosecución de la apelación o posteriormente.

«Para proseguir la apelación se requiere y basta que la parte invoque la intervención del juez superior para corregir la sentencia impugnada, acompañando copia de la misma e indicando las razones por las que apela» (c. 1634 § 1). Hace falta, por tanto, una indicación de las razones que sostienen la apelación, además de manifestar el perjuicio que la sentencia ocasiona a la parte apelante. Esta petición puede ser rechazada si no se pide el ministerio del juez, o éste no es competente, o no se acompaña copia de la sentencia o faltan las razones que sustentan la impugnación de la sentencia. El decreto de rechazo es recurrible (c. 1505 § 4). La confirmación de la inadmisión tiene como efecto que la sentencia deviene firme. Todo este proceso, como dice Llobell, lleva a una decisión «che dichiara inammissibile l'appello è una pronuncia di rito, perché il giudice non ha ancora valutato la fondatezza nel merito della domanda»⁵⁸.

Éste no parece ser el caso del c. 1680 § 2. Por el tenor de la norma no se deduce que estemos en presencia de un decreto de inadmisibilidad de la petición de apelación, por el contrario, se presupone que hemos sobrepasado ese momento procesal, porque las partes han sido citadas y se les pide observaciones. En ese estadio de la apelación sólo caben, en principio, dos formas de finalizarlo: por crisis procesal –renuncia o caducidad⁵⁹, que en segunda instancia tienen un efecto mucho más trascendente, como se desprende del c. 1641, 3º, que en primera instancia (c. 1525)– o por sentencia definitiva.

En la explicación del nuevo c. 1680 § 2 que da el *Subsidio aplicativo* hallamos expresiones parecidas y un diseño procedimental que recuerda al procedimiento breve del derogado c. 1682 § 2:

«En caso de apelación, una vez recibidas las actas judiciales el *tribunal de la instancia superior* debe constituir el colegio de los jueces, designar el defensor del vínculo y exhortar a las partes a presentar las observaciones dentro de un plazo preestablecido. Si el tribunal colegial considera la

⁵⁸ LLOBELL, J., *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. «Mitis Iudex»*. Relazione al Seminario di studio «La riforma operata dal m.p. «Mitis Iudex»» organizzato da LUMSA Università, p. 19, en http://www.consociatio.org/repository/Llobell_Lumsa.pdf.

⁵⁹ Cfr. DE DIEGO-LORA, C. y RODRÍGUEZ-OCAÑA, R., *Lecciones de Derecho Procesal Canónico*, 397-410.

apelación manifiestamente dilatoria, debe *confirmar a través de un decreto* la sentencia de primera instancia. Si, en cambio, *admite la apelación*, proceda del mismo modo como en primera instancia, con las debidas adaptaciones (cfr. *MI*, can. 1680)»⁶⁰.

A diferencia del procedimiento abreviado suprimido, el regulado por el c. 1680 § 2 sólo se pone en marcha si la sentencia de primera instancia ha sido apelada. Su razón de ser es evitar dilaciones infundadas y puede activarse tanto si la sentencia fue afirmativa como negativa. Por el contrario, coincide con el anterior procedimiento abreviado en que la sentencia apelada debe ser la de primera instancia.

Con el anterior régimen procesal, el tribunal de apelación siempre iniciaba su ministerio examinando si la sentencia de primera instancia afirmativa debía ser ratificada o pasar al trámite ordinario de apelación. Ahora ni el texto del *Subsidio aplicativo* ni el canon aclaran si toda apelación de sentencia de primera instancia pasará primero por este examen abreviado en busca de intenciones dilatorias.

«En mi opinión –escribe Rodríguez-Chacón–, (...) expresamente se dispone que sólo cabrá prescindir del trámite ordinario de la apelación y dictar decreto confirmatorio de la anterior sentencia cuando *evidentemente* el recurso planteado aparezca como *meramente dilatorio*. Se han de dar, pues, dos condiciones cumulativas: 1) que la única virtualidad del recurso sea su carácter *meramente dilatorio* o retardatario de una solución definitiva; y 2) que ese aspecto sea *evidente*»⁶¹.

La fuerte sospecha de la existencia de ambas condiciones (evidencia y dilación) debe existir en el tribunal para poder iniciar el procedimiento de ratificación. Pues bien, el único momento que se vislumbra susceptible para alcanzar dicha fuerte sospecha es el análisis de la prosecución de la apelación. Más adelante, en el examen de las observaciones de parte deberá quedar acreditada tanto la evidencia como la finalidad meramente dilatoria de la apelación.

Por ello la doctrina, en un primer análisis de la norma, sin contar aún con referencias jurisprudenciales, entiende que apreciar sólo una falta de fundamen-

⁶⁰ *Subsidio aplicativo*, 30.

⁶¹ RODRÍGUEZ-CHACÓN, R., «La ejecutividad de las sentencias afirmativas de nulidad de matrimonio no apeladas», 33.

to del recurso en ese momento inicial no bastará, para no caer en un juicio de intenciones habrá de apreciarse en función de datos objetivos que lo sustenten⁶².

En todo caso, como está excluida del ordenamiento canónico la interpretación extensiva de las normas que limitan el libre ejercicio de los derechos (cfr. c. 18), el tribunal de apelación deberá ser especialmente cuidadoso en la aplicación interpretativa del c. 1680 § 2 en su confrontación con el derecho de apelación de las partes expresamente reconocido (c. 1680 § 1) y cuyo fundamento, como comparte la generalidad de la doctrina canónica, hunde sus raíces en el derecho natural⁶³. La aplicación de este procedimiento para ratificar la sentencia de primera instancia por decreto debe entenderse, por tanto, como una excepción⁶⁴.

Del estudio de esta nueva regulación de la apelación Boni deduce que «Circola invero, in generale, nel *Motu Proprio* un generale sfavore per l'appello: è vero che esso allunga inevitabilmente i tempi del processo, ma la sua funzione è essenziale al servizio della verità. La possibilità di appellare le sentenze e di riesaminare le valutazioni del primo giudice (...) è stata un capitale traguardo di civiltà, cui la Chiesa, nella storia, non è estranea, anzi ha ricoperto un ruolo cruciale. Un'eredità, dunque, che non va sperperata»⁶⁵.

He manifestado que las determinaciones del c. 1680 § 2 se pueden aplicar indiferentemente tanto a sentencias afirmativas como negativas. Una mirada más penetrante a la norma, sin embargo, puede descubrir que posiblemente los redactores del canon estén pensando sobre todo en la sentencia *pro nullitate*. La razón en la que me apoyo es precisamente la dilación. Se está pensando en la parte que interpone la apelación para retrasar intencionadamente el futuro matrimonio de la contra parte que podría haber contraído ya si la sentencia afirmativa no hubiera sido apelada. Si la sentencia hubiera sido *pro vinculo*, el retraso parece menos explicable, y aunque hubiera razones para ello parecen menos frecuentes e inmediatas.

Una última cuestión me plantea el procedimiento de apelación en relación con el proceso más breve. Es sabido que si en el grado de apelación se

⁶² Cfr. *ibíd.*

⁶³ Cfr. WERNZ, F. X. y VIDAL, P., *Ius canonicum*, VI: *de processibus*, 551; NOVAL, J., *Commentarium Codicis Iuris Canonici*, IV: *de iudiciis*, Romae: Petri Marietti, 1920, 419.

⁶⁴ Cfr. RODRÍGUEZ-CHACÓN, R., «La ejecutividad de las sentencias afirmativas de nulidad de matrimonio no apeladas», 34.

⁶⁵ BONI, G., «La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)», *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 10 (2016) 63.

aduce un nuevo capítulo el tribunal de apelación puede admitirlo y juzgarlo como en primera instancia (c. 1680 § 4).

Este texto es una transcripción del anterior c. 1683. El contexto, sin embargo, ha cambiado, porque ahora existe un nuevo proceso de nulidad que sólo compete al Obispo diocesano. Si el nuevo capítulo aducido en apelación cumple las condiciones requeridas por el c. 1683, el tribunal de apelación no podría admitirlo y debería remitir la causa sobre ese concreto capítulo al Obispo competente. Esto tiene su complejidad desde el punto de vista de la competencia jerárquica e impugnativa, que se rige por normas de competencia absoluta y cuya violación está sancionada con nulidad insanable de la sentencia (cc. 1440 y 1620, 1°).

El criterio funcional de reparto de la competencia está íntimamente relacionado con la existencia en la Iglesia de tribunales de diverso grado que conforman las instancias sucesivas por las que transcurrirá la causa hasta alcanzar la firmeza de la sentencia, es decir, una situación procesal en la que se agota, en vía ordinaria, el número de tribunales superiores a los que se puede apelar. Un supuesto típico de incompetencia jerárquica aparece cuando aun correspondiendo el grado y la instancia, no se siga la línea ascendente⁶⁶. Una vez que ha sido tratada la causa por una instancia diocesana, no puede regresar al mismo tribunal, sino seguir la línea ascendente, también cuando se ha introducido un nuevo capítulo⁶⁷. Como la causa no puede regresar al tribunal de primera instancia del que procede, y el tribunal ante quien se introduce el nuevo capítulo no puede juzgarlo porque en él concurren los requisitos del c. 1683, parece que la solución más factible –pero lejana del principio de proximidad– es que sea el Obispo moderador de dicho tribunal de apelación quien decida sobre el nuevo capítulo.

9. EL PROCESO MÁS BREVE ANTE EL OBISPO DIOCESANO⁶⁸

La reforma del MI ha creado un nuevo proceso que se caracteriza por ser un proceso especial para las causas de nulidad matrimonial; ante un solo juez,

⁶⁶ Aquí se contempla el tribunal como órgano, es indiferente que sea juez el Obispo o su tribunal, ambos son del mismo grado y la misma instancia.

⁶⁷ Cfr. LLOBELL, J., «Il tribunale competente per l'appello della sentenza di nullità del matrimonio giudicata *tamquam in prima instantia ex can. 1683*», *Ius Ecclesiae* 8 (1996) 689-711.

⁶⁸ Para su estudio, cfr. DEL POZZO, M., *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Roma: EDUSC, 2016. NÚÑEZ, G., «El proceso *brevior*: exigencias y estructura», *Ius Canonicum* 56 (2016) 135-155.

que es el Obispo diocesano⁶⁹; cuya parte procedimental se atribuye al Vicario judicial y después a un instructor; y que está diseñado para que pueda tratarse y definirse la causa en un plazo abreviado de tiempo en comparación con el proceso ordinario de nulidad de matrimonio.

a) *Requisitos para el inicio del proceso más breve (c. 1683)*

Para que pueda dar comienzo un proceso de este tipo hacen falta que se cumplan cumulativamente dos requisitos (c. 1683): 1º que la demanda «haya sido propuesta por ambos cónyuges o por uno de ellos, con el consentimiento del otro»; 2º que «concurran circunstancias de las personas y de los hechos, sostenidas por testimonios o documentos, que no requieran una investigación o una instrucción más precisa, y hagan manifiesta la nulidad».

El litisconsorcio activo de las partes es un requisito necesario; si no lo hubiera, al menos debe existir el consentimiento *expreso* de la otra parte. No puede aducirse aquí la presunción de consentimiento del art. 11 § 2 de las *Reglas de procedimiento* porque sólo es aplicable al proceso ordinario de nulidad, no al abreviado. «El demandado puede otorgar su consentimiento emitiéndolo de diversas formas, siempre que sea de modo público y que su voluntad se manifieste de modo inequívoco. En caso contrario, la causa no puede tramitarse por el proceso más breve»⁷⁰. Estas cuestiones fueron objeto de respuestas privadas del PCTL⁷¹.

Si el Vicario judicial, cuando recibe la demanda considera que la causa puede ser tratada con el proceso más breve, invitará a la parte que no lo haya firmado a comunicar al tribunal si quiere asociarse a la petición presentada y participar en el proceso (art. 15 de las *Reglas de procedimiento*).

El segundo requisito cumulativo para que una causa de nulidad sea sustanciada por el proceso más breve es que la nulidad del matrimonio sea manifiesta. Acerca de qué circunstancias de hechos y personas hacen manifiesta la

⁶⁹ Acerca de qué debe entenderse por Obispo diocesano, cfr. DEL POZZO, M., «L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m.p. "Mitis iudex"», *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 36 (2015) 9.

⁷⁰ ROCA, M., «La reforma del proceso canónico de las causas de nulidad matrimonial», 28.

⁷¹ PONTIFICIO CONSEJO PARA LOS TEXTOS LEGISLATIVOS, *Respuesta*, 1-X-2015, Prot. N. 15138/2015; y *Respuesta*, 1-X-2015, Prot. N. 15139/2015. Se pueden consultar en <http://www.delegumtextibus.va>.

nulidad, el art. 14 de las *Reglas de procedimiento* (objeto de bastantes referencias por parte de la doctrina) establece:

«Entre las circunstancias que pueden permitir tratar la causa de nulidad del matrimonio a través del proceso más breve según los cánones 1683-1687, se cuentan por ejemplo: la falta de fe que puede generar la simulación del consentimiento o el error que determina la voluntad, la brevedad de la convivencia conyugal, el aborto procurado para impedir la procreación, la obstinada permanencia en una relación extra conyugal al momento de las nupcias o en un tiempo inmediatamente sucesivo, la ocultación dolosa de la esterilidad o de una grave enfermedad contagiosa o de hijos nacidos en una relación precedente o de un encarcelamiento, un motivo para casarse totalmente extraño a la vida conyugal o consistente en el embarazo imprevisto de la mujer, la violencia física ejercida para arrancar el consentimiento, la falta de uso de razón comprobada por documentos médicos, etc.».

La norma ha sido criticada⁷². Las hipótesis previstas son muy heterogéneas, y se refieren tanto a capítulos de nulidad (simulación, error determinante, dolo, incapacidad total, etc.) como a simples hechos o circunstancias emblemáticas de algún vicio (falta de fe, aborto procurado, relación extraconyugal cercana a la boda, esterilidad, grave enfermedad contagiosa, etc.). La diversidad de opiniones críticas ha dado lugar a que la Rota Romana se manifeste largamente en el *Subsidio aplicativo* para aclarar que:

«Es necesario evitar cualquier equívoco: *estas circunstancias, de hecho, no son nuevos capítulos de nulidad*.

Se trata, simplemente, de situaciones que la jurisprudencia, desde hace tiempo, ha enumerado como *elementos sintomáticos de invalidez del consentimiento nupcial*, los cuales pueden ser fácilmente comprobados por testimonios o documentos de inmediata adquisición.

⁷² Cfr. BONI, G., «La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)», 15-31; CEBRIÁ, M. D., «Las circunstancias y hechos orientativos de la nulidad clara del art. 14 del *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, para abrir el proceso breve ante el Obispo», *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado* 40 (2016); ALEDA, M., «¿Nuevas causas de nulidad matrimonial canónica? el sentido del art. 14 § 1 de las reglas de procedimiento contenidas en la Carta Apostólica *Mitis Iudex Dominus Iesus*», *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado* 40 (2016).

Éstos pueden presentar, en ciertos casos, un gran valor fáctico hasta el punto de llegar a sugerir con evidencia la nulidad del matrimonio. En este sentido, una lectura más atenta y realista de la condición global de los fieles en el mundo actual, transversalmente a las culturas, permite identificar algunos elementos claramente indicativos de la invalidez, que tal vez, en un contexto sociocultural diverso y anterior no eran reconocidos plenamente»⁷³.

El *Subsidio aplicativo* seguidamente da una explicación de cada una de esas circunstancias⁷⁴. Algunos autores también han realizado su propio análisis a la luz de esas explicaciones y la valoración general es más bien negativa.

«Las “circunstancias” analizadas son reflejo, por lo general, de casos reales extraídos de la praxis judicial. Hay bastante acuerdo en considerar que no constituyen nuevas causas de nulidad sino supuestos de hecho encuadrables en capítulos ya definidos legalmente, y ni siquiera son prueba evidente de la misma, sino que hay que considerarlos indicios que, en principio, son favorecedores, acompañados de importantes principios de prueba, para el conocimiento de la causa por medio del proceso *brevior*. Sin perjuicio de que, cumplidas las condiciones requeridas legalmente y ya en el propio ámbito del concreto proceso, puedan estimarse presunciones a efectos probatorios»⁷⁵.

Parece, por tanto, que el problema general que percibe la doctrina es que esas circunstancias, en la mayoría de los casos, no sólo no son manifestativas de la nulidad, sino que requerirán una prueba acreditativa que dista mucho de la evidencia requerida por el legislador para los supuestos del proceso más breve.

b) Desarrollo del proceso más breve (cc. 1684-1687 §§ 1 y 2)

El *iter* procedimental del proceso *brevior* está regulado en los cc. 1684-1686, y se caracteriza por ser un reflejo del principio procesal de concentra-

⁷³ *Subsidio aplicativo*, 33-34.

⁷⁴ *Subsidio aplicativo*, 34-37.

⁷⁵ ALEDA, M., «¿Nuevas causas de nulidad matrimonial canónica? el sentido del art. 14 § 1 de las reglas de procedimiento contenidas en la Carta Apostólica *Mitis Iudex Dominus Iesus*», 58. Cfr. CEBRIÁ, M. D., «Las circunstancias y hechos orientativos de la nulidad clara del art. 14 del *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, para abrir el proceso breve ante el Obispo», 18.

ción: se atribuye al Vicario judicial los preliminares de la causa (admisión, citación y fórmula de la duda y nombramiento del instructor y asesor). Una vez finalizados citará «a las partes, al defensor del vínculo y los testigos para la sesión que ha de celebrarse no más allá de treinta días, para la recogida de las pruebas»⁷⁶.

El instructor, si es posible, debe recoger las pruebas en una sola sesión. Una vez finalizada señalará un plazo de 15 días para presentar observaciones finales del defensor del vínculo (necesarias) y de las partes (eventuales).

Terminados todos estos trámites, se envían las actas al Obispo para que decida, previo estudio del sumario y consultados el instructor y el asesor⁷⁷. «Corresponde al Obispo diocesano pronunciar la sentencia, y esta competencia exclusiva no puede ser delegada a un tribunal diocesano o interdiocesano»⁷⁸. Parece por el contrario que sí podrá delegar en un juez único, aunque no parece que guste esta opción (pero no se prohíbe), porque «se quiere que el Obispo personalmente sea signo de la cercanía de la justicia eclesiástica a los fieles y garante contra posibles abusos»⁷⁹.

El Obispo sólo puede dar sentencia en favor de la nulidad, afirmativa, si alcanza la certeza moral de lo alegado y probado en juicio. En caso contrario, remite la causa al proceso ordinario (c. 1687 § 1).

c) *La apelación* (c. 1687 §§ 3 y 4)

La apelación contra la sentencia afirmativa del Obispo⁸⁰ se rige por dos §§ del c. 1687:

«§ 3. Contra la sentencia del Obispo se da apelación al Metropolitano o a la Rota Romana; si la sentencia fue dada por el Metropolitano, se da apelación al sufragáneo más antiguo; y contra la sentencia de otro Obispo que no tiene otra autoridad superior debajo del Romano Pontífice, se da apelación al Obispo por él designado establemente.

⁷⁶ *Subsidio aplicativo*, 39.

⁷⁷ «Para la función de instructor pueden elegirse clérigos o laicos, que se distingan por las buenas costumbres, prudencia y doctrina. Los asesores, aprobados por el Obispo para esta función, pueden ser clérigos o laicos, de honesta conducta»: *Subsidio aplicativo*, 39.

⁷⁸ *Subsidio aplicativo*, 41.

⁷⁹ *Ibíd.*

⁸⁰ Para este tema puede consultarse DEL POZZO, M., *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, 215-220.

»§ 4. Si resulta evidente que la apelación es meramente dilatoria, el Metropolitano o el Obispo mencionado en el § 3, o el Decano de la Rota Romana, la rechazará por decreto desde el primer momento; si en cambio se admite la apelación, se envíe la causa al examen ordinario en el segundo grado».

El tribunal competente para recibir la apelación se deduce de las siguientes reglas:

1ª Contra la sentencia del Obispo sufragáneo se apela al Metropolitano⁸¹ o a la Rota Romana. El MI mantiene la posibilidad de acudir en apelación a la Rota Romana⁸², derecho especialmente protegido por la DC⁸³ y la reforma que se llevó a cabo de los tribunales de tercera instancia en la Iglesia latina, que en España dio lugar a una nueva ley para el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica⁸⁴.

Hay, por tanto, una concurrencia de tribunales de segunda instancia. En el hipotético caso de diferentes apelaciones una al Metropolitano y otra al Decano de la Rota Romana, la cuestión se solventará por la regla del c. 1632 § 2: «resuelve la causa el tribunal que tenga grado superior, quedando a salvo lo que prescribe el can. 1415», es decir, la ley de la prevención.

2ª Si la sentencia proviene del Obispo Metropolitano se apela al *sufragáneo más antiguo* en el oficio o a la Rota Romana⁸⁵. La introducción del fuero del sufragáneo más antiguo es novedosa, y llama la atención que se haya preferido al fuero de la proximidad integrado en los criterios fundamentales que

⁸¹ *Subsidio aplicativo*, 43. La apelación a la sede Metropolitana es el quinto de los criterios fundamentales de la reforma: cfr. Preámbulo MI. Este fuero estaba ya en el CIC: c. 1438, n. 1, con la excepción del c. 1439.

⁸² La apelación a la Sede Apostólica es el séptimo de los criterios fundamentales de la reforma: Preámbulo MI.

⁸³ Cfr. DC, Preámbulo, 17 y arts. 27, 257, 283.

⁸⁴ Cfr. JUAN PABLO II, m.p. *Nuntiaturae Apostolicae in Hispania*, 2-X-1999: AAS 92 (2000) 5-17. Este m.p. reformó el privilegio hasta entonces existente, quedando la Rota Española configurada como tribunal nacional, con competencias de tercera instancia, cuyas sentencias son apelables ante la Rota Romana.

Antes de 1999, para que una sentencia de la Rota Española fuera examinada en Roma, se debía dirigir una petición a la Sagrada Congregación para los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios. Cfr. SECRETARÍA DE ESTADO, «Solvitur dubium modum procedendi cum aliqua causa iudicialis a tribunal Rotae Nuntiaturae Apostolicae in Hispania decisa devolvitur ad Sedem Apostolicam por nova instantia», 22-I-1954, en OCHOA, X. (cur.), *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, III: *Leges annis 1959-1968 editae*, Roma: Commentarium pro Religiosis, 1972, 2414n.

⁸⁵ *Subsidio aplicativo*, 43.

han guiado la reforma⁸⁶ y presente en la nueva normativa⁸⁷. El sufragáneo más antiguo no tiene por qué ser el más próximo.

Tampoco se ha querido escoger la regla común del c. 1438, 2º: «cuando la causa se conoce en primera instancia ante el Metropolitano, la apelación se interpone ante el tribunal que él mismo haya designado de modo estable, con aprobación de la Sede Apostólica». Y si a éste se hubiera sumado el criterio de la proximidad, tendríamos un tribunal de apelación estable y cercano, que facilitaría un ahorro a los fieles y daría mayor seguridad jurídica.

Como la expresión *suffragáneo más antiguo* puede entenderse de diversas maneras: más antiguo en edad, más antiguo en la promoción episcopal, o sede más antigua. Se planteó privadamente la cuestión al Pontificio Consejo para los Textos Legislativos (PCTL). La respuesta fue la siguiente:

«il Vescovo suffraganeo al quale si indirizza l'appello non sia il più anziano per età o per nomina, ma piuttosto il Vescovo della sede più antica della metropolia»⁸⁸.

El razonamiento del PCTL era:

«Il CIC menziona il *suffraganeus antiquior* anche nei canoni 421 § 2, 425 § 3 e 501 § 3, riferendosi a compiti suppletivi che questi ha da svolgere in casi determinati e piuttosto rari, aggiungendo però sempre che si tratta del Vescovo *promotione antiquior*. Questo riferimento alla promozione, cioè alla nomina del Vescovo, manca nel *motu proprio* dell'8 settembre.

»D'altra parte, dato che l'appello contra la sentenza del Metropolita ex can. 1687 § 3 potrebbe verificarsi con una certa regolarità, la sicurezza del diritto nella conduzione del processo richiede che il destinatario dell'appello sia stabile e non soggetto a continui cambiamenti. La stabilità del giudice di seconda istanza e, infatti, un principio sancito dalle norme generali del processo (cfr. can. 1438 CIC, in particolare § 2). Perciò, pare dover dedursi che il Vescovo suffraganeo al quale si indirizza

⁸⁶ «VI. *La función propia de las Conferencias episcopales*. – (...) El restablecimiento de la cercanía entre el juez y los fieles, en efecto, no tendrá éxito si desde las Conferencias no se da a cada Obispo el estímulo y conjuntamente la ayuda para poner en práctica la reforma del proceso matrimonial». Preámbulo MI.

⁸⁷ Cfr. arts. 7 § 1 y 19 de las *Reglas de procedimiento para tratar las causas de nulidad de matrimonio*, MI.

⁸⁸ PONTIFICIO CONSEJO PARA LOS TEXTOS LEGISLATIVOS, *Respuesta*, 13-X-2015, Prot. 15155/2015. Puede consultarse en: <http://www.delegumtextibus.va>.

l'appello non sia il più anziano per età o per nomina, ma piuttosto il Vescovo della sede più antica della metropoli»⁸⁹.

La expresión «sufragáneo más antiguo», para el PCTL, designa al obispo que ocupa la sede sufragánea más antigua. Pues bien, el *Subsidio aplicativo*, ignorando esta respuesta, se inclina por una interpretación diversa y entiende que esos términos se refieren «al *sufragáneo más antiguo*⁹⁰ en el Oficio»⁹¹.

Particularmente me parece más acorde con los principios procesales la respuesta del PCTL y los argumentos en que se sustenta, como son la seguridad del derecho y la estabilidad de una sede de apelación en lugar de estar sometidos a cambios irregulares.

3ª Por último, cuando la sentencia es del Obispo que no tiene superior por debajo del Romano Pontífice, se da apelación al Obispo por él designado establemente (c. 1673 § 3) y también a la Rota Romana⁹².

Hasta ahora en esos casos se aplicaba el c. 1438, 2º y la designación que hacía el Obispo debía ser aprobada por la Signatura Apostólica⁹³ (aprobación no contemplada en el nuevo c. 1673 § 3), porque «la potestad judicial de *todos* los tribunales de apelación de la Iglesia latina proviene del Santo Padre. En efecto (...), en la Iglesia latina no hay ningún Obispo diocesano (salvo el de Roma) que posea potestad *nativa* sobre ningún otro Obispo diocesano»⁹⁴. Esta aprobación debería mantenerse porque ayudaría a tener una sede estable y cercana, según los criterios de la nueva reforma, y a superar las posibles dificultades que pudieran surgir en la práctica.

Una última cuestión conviene plantearse, sobre las apelaciones evidentemente dilatorias.

«Si resulta evidente que la apelación es meramente dilatoria, el Metropolitano o el Obispo mencionado en el § 3, o el Decano de la Rota

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Cfr. DEL POZZO, M., *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo...*, 218. Con esta interpretación, se evita el debate histórico que pudiera plantearse acerca de qué sede es anterior, si se entendiera que la norma se refiere a la sede sufragánea más antigua. Cfr. BONI, G., «La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)», 53-55.

⁹¹ *Subsidio aplicativo*, 43.

⁹² Cfr. *Subsidio aplicativo*, 43.

⁹³ Cfr. TRIBUNAL SUPREMO DE LA SIGNATURA APOSTÓLICA, *Decreto de aprobación de tribunal de apelación*, 15-I-1996, Prot. N. 4419/1/96 SAT. Se puede consultar en <http://prelaturaspersonales.org/signatura-apostolica-decreto-de-aprobacion-del-tribunal-de-apelacion-15-i-1996/>.

⁹⁴ LLOBELL, J., *Los procesos matrimoniales en la Iglesia*, 175.

Romana, la rechazará por decreto desde el primer momento; si en cambio se admite la apelación, se envíe la causa al examen ordinario en el segundo grado» (c. 1687 § 4).

Es plausible que, por las características del proceso más breve, la apelación de la sentencia no sea frecuente, porque ambos cónyuges son litisconsortes activos, o ha solicitado uno la nulidad con el consentimiento del otro (c. 1683, 1º). Como sólo puede haber en este tipo de procesos sentencia *pro nullitate* (c. 1687 § 1), la presencia del gravamen necesario para impugnar la sentencia sólo podría invocarse por quienes se opusieron a la demanda. En todo caso, parece que la posibilidad más cercana de apelación de la sentencia dictada en los procesos breves provenga del defensor del vínculo. En este contexto parece improbable que un defensor del vínculo interponga la apelación con una intención *evidentemente dilatoria*⁹⁵.

Hemos expuesto ya cómo en el *proceso ordinario de nulidad* el MI ha diseñado un procedimiento abreviado para constatar la existencia de la finalidad evidentemente dilatoria de la apelación. Si esa finalidad se acredita, el tribunal mediante decreto debe confirmar la sentencia de primera instancia (c. 1680 § 2). La solución del c. 1687 § 4 para atajar las apelaciones dilatorias es diversa. Este último canon no contempla un procedimiento abreviado que finalice con decreto confirmatorio de la sentencia apelada, sino el rechazo de la petición de apelación *in limine*, una vez acreditada la evidencia de la dilación. Esto representa una novedad porque se añade una razón hasta ahora inexistente en el CIC (cc. 1505 §§ 1-3 y 1635) para no admitir una demanda de apelación. Siguiendo con la lógica procedimental del c. 1505 § 4, el rechazo *in limine litis* de la demanda de apelación es recurrible en el plazo de 10 días ante el tribunal de siguiente instancia; si la inadmisión es confirmada, sólo quedará como vía de impugnación la querella de nulidad o, según alguna jurisprudencia, la *restitutio in integrum*⁹⁶.

⁹⁵ Cfr. BONI, G., «La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)», 62-63.

⁹⁶ No soy partidario de ese remedio extraordinario cuando se trata de impugnar una resolución que confirma el rechazo de la demanda, cfr. RODRÍGUEZ-OCAÑA, R., *La demanda judicial en el proceso canónico*, Pamplona: Navarra Gráfica Ediciones, 2002, 313-339.

10. CONCLUSIÓN

La nueva regulación para las causas de nulidad de matrimonio, desde mi punto de vista, y después de este apretado resumen que presento, es un intento no del todo conseguido para hacer más eficaces los procesos de nulidad de matrimonio.

Sin lugar a dudas, se han dado avances para hacer la justicia más asequible y rápida. También hay progresos claros en la facilitación del acceso a los tribunales eclesiásticos, concretada en la gratuidad de los procesos de nulidad (sería deseable que la gratuidad no limitara la libertad de los fieles a ser asistidos jurídicamente [c. 1481 § 1]). Hay que alabar igualmente el deseo de fomentar una mayor responsabilidad de los Obispos en la administración de la justicia en su diócesis, y desde luego la sentirán más cercana porque ahora ellos mismos deben impartirla en el proceso más breve.

Sin embargo, los nuevos títulos de competencia; la sutil reformulación del valor de algunas pruebas; las limitaciones al derecho de apelación basadas en la evidencia de su intención dilatoria y no en la falta de fundamento; los supuestos de los que puede deducirse la evidencia de la nulidad matrimonial que facilite introducir la causa ante el Obispo, etc., son elementos que hacen pensar en una posible debilitación procesal de la tutela del *favor matrimonii*, lógico corolario si se tiene en cuenta que la reforma es propiciada por el convencimiento (presunción) de que hay un desmesurado número de fieles que, pudiendo obtener la declaración de nulidad, quedaban excluidos por el anterior régimen jurídico de las causas de nulidad matrimonial.

Bibliografía

- ALEDA, M., «¿Nuevas causas de nulidad matrimonial canónica? el sentido del art. 14 § 1 de las reglas de procedimiento contenidas en la Carta Apostólica *Mitis Iudex Dominus Iesus*», *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado* 40 (2016): http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=2.
- ASSOCIAZIONE CANONISTA ITALIANA (cur.), *La procedura matrimoniale abbreviata*, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1998.
- BAÑARES, J. I., «El “favor matrimonii” y la presunción de validez del matrimonio contraído», *Ius Canonicum* 45 (2005) 243-257.
- BONI, G., «La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (3 partes)», *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 9, 10 y 11 (2016): http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=820&Itemid=40.
- BONNET, P. A. y GULLO, C. (cur.), *La doppia conforme nel processo matrimoniale*, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2003.
- BUNGE, A. W., *Presentación del nuevo proceso matrimonial*: www.awbunge.com.ar/Nuevo-Proceso-Matrimonial.pdf.
- CEBRIÁ, M. D., «Las circunstancias y hechos orientativos de la nulidad clara del art. 14 del *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, para abrir el proceso breve ante el Obispo», *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado* 40 (2016): http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=2.
- CORECCO, E., «Fondamenti ecclesiologici del nuovo Codice di diritto canonico», *Concilium* 22 (1986) 340-351.
- DANEELS, F., «Osservazioni sul processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio», *Quaderni di diritto ecclesiale* 14 (2001) 77-88.
- DE DIEGO-LORA, C. y RODRÍGUEZ-OCAÑA, R., *Lecciones de Derecho Procesal Canónico. Parte general*, Pamplona: Eunsa, 2003.
- DE DIEGO-LORA, C., «Comentario al c. 1631», en INSTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA, *Código de Derecho Canónico*. Edición bilingüe y anotada, 8 ed. Pamplona: Eunsa, 2015.
- DE DIEGO-LORA, C., «La apreciación de la prueba de documentos y confesión judicial en el proceso de nulidad de matrimonio», *Ius Canonicum* 7 (1967) 529-573.

- DEL POZZO, M., «Statistiche delle cause di nullità matrimoniale 2001-2005: “vecchi” dati e “nuove” tendenze», en FRANCESCHI, H. y ORTIZ, M. A. (cur.), *Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, Roma: EDUSC, 2009, 451-479.
- DEL POZZO, M., «L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m.p. “Mitis iudex”», *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 36 (2015): http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=view&id=797&Itemid=40.
- DEL POZZO, M., *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Roma: EDUSC, 2016.
- FERNÁNDEZ ESPINAR, R., *El principio «testis unus testis nullus» en el derecho procesal español*, Madrid: Imprenta García Blanco, 2005.
- GROCHOLEWSKI, Z., «La función del juez en las causas matrimoniales», *Ius Canonicum* 45 (2005) 13-33.
- LLOBELL, J., «La necessità della doppia sentenza conforme e l'“appello automatico” ex can. 1682 costituiscono un gravame? Sul diritto di appello presso la Rota Romana», *Ius Ecclesiae* 5 (1993) 602-609.
- LLOBELL, J., «Il tribunale competente per l'appello della sentenza di nullità del matrimonio giudicata *tamquam in prima instantia ex can. 1683*», *Ius Ecclesiae* 8 (1996) 689-711.
- LLOBELL, J., «Comentario al c. 1673», *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, IV/2, 3 ed. Pamplona: Eunsa, 2002.
- LLOBELL, J., «Comentario al título I: de los procesos matrimoniales», en MARZOA, Á., MIRAS, J. y RODRÍGUEZ-OCAÑA, R. (eds.), *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, IV/2, 3 ed. Pamplona: Eunsa, 2002.
- LLOBELL, J., *Los procesos matrimoniales en la Iglesia*, Madrid: Rialp, 2014.
- LLOBELL, J., «Novità procedurale riguardanti la Rota Romana: la facoltà speciali», en FRANCESCHI, H. y ORTIZ, M. A., *Ius et matrimonium. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, Roma: EDUSC, 2015, 297-329.
- LLOBELL, J., *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. «Mitis Iudex»*. Relazione al Seminario di studio «La riforma operata dal m.p. “Mitis Iudex”» organizzato da LUMSA Università. Una versión sin notas en: http://www.consociatio.org/repository/Llobell_Lumsa.pdf.
- MIRAS, J., *La confirmación de la vía judicial para las causas de nulidad del matrimonio en el m.p. Mitis Iudex. Conferencia en el XXVIII Curso de Actualización en Derecho canónico*, Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra,

- 12-13 de noviembre de 2015. La conferencia puede consultarse en: <http://dadun.unav.edu/handle/10171/39400>.
- MORÁN, C. y PEÑA, C., *Nulidad de matrimonio y proceso canónico. Comentario adaptado a la Instrucción Dignitas connubii*, Madrid: Dykinson, 2007.
- NOVAL, J., *Commentarium Codicis Iuris Canonici*, IV: *de iudiciis*, Romae: Petri Marietti, 1920.
- NÚÑEZ, G., «El proceso *brevior*: exigencias y estructura», *Ius Canonicum* 56 (2016) 135-155.
- PEÑA GARCÍA, C., «Agilización de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: de las propuestas presinodales al motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* y retos pendientes tras la reforma», *Ius Canonicum* 56 (2016) 41-64.
- ROCA, M., «La reforma del proceso canónico de las causas de nulidad matrimonial: de las propuestas previas a la nueva regulación», *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado* 40 (2016): http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=2.
- RODRÍGUEZ-CHACÓN, R., «El *rescriptum ex audientia* SS.MI de 11 de febrero de 2013», *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado* 34 (2014): http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=2.
- RODRÍGUEZ-CHACÓN, R., «La ejecutividad de las sentencias afirmativas de nulidad de matrimonio no apeladas», *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado* 40 (2016): http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=2.
- RODRÍGUEZ-OCAÑA, R., *La demanda judicial en el proceso canónico*, Pamplona: Navarra Gráfica Ediciones, 2002.
- STANKIEWICZ, A., «I doveri del giudice», en BONNET, P. A. y GULLO, C. (cur.), *Il processo matrimoniale canonico*, 2 ed. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1994, 299-321.
- WERNZ, F. X. y VIDAL, P., *Ius Canonicum*, VI, *De processibus*, Romae: Univ. Gregoriana, 1927.

